

Análisis de la coyuntura política, semana del 4 al 10 de mayo

Introducción

El presente análisis persigue integrar lo indicado en los informes anteriores, dando cuenta de los elementos estructurantes de la actual situación política y de la manera en que ella responde a las diferentes crisis que se encuentran en juego. En cada acápite del documento, en primer lugar se desarrollarán los aspectos generales, y en segundo los que específicamente se refieren a la situación de la semana recién pasada. Lo anterior resulta en una mayor extensión del documento, pero evita entregar dos textos para cumplir con lo solicitado.

El contexto internacional

I. Aspectos generales

La situación internacional se caracteriza por la existencia de macro procesos que determinan la crisis en distintos niveles y alcances.

La masiva llegada al gobierno en Europa de posiciones nacionalistas, antiglobalización y fuertemente xenófobas (se sostiene que más bien son aporófobas), enmarcadas en la caída de las tasas de crecimiento, en la concentración económica a niveles nunca vistos, en una alza del desempleo y del endeudamiento masivo de los Estados, ha sido acompañada de una pérdida de influencia de los partidos tradicionalmente concebidos de izquierda. Mientras, Estados Unidos padece de la emergencia de tendencias nacionalistas y antiglobalización, pero su situación ha sido de repunte económico en el contexto de la confrontación con China. La pérdida de prestigio del partido Demócrata muestra la emergencia de una nueva izquierda de orientación declaradamente socialista que desafía al establishment y que sólo se ha subordinado manteniendo identidad ante la posibilidad de impedir la reelección de Trump.

Los cuestionamientos masivos al capitalismo en su expresión neoliberal en el mundo occidental, a través de manifestaciones socio políticas no partidistas, han marcado fuertemente una contraposición entre los partidos tradicionales y los manifestantes y la parte de la ciudadanía que los ha apoyado.

En los países de África y Medio Oriente se observa una extensión y mantención de la crisis abierta por la intervención de Estados Unidos en el período de Hillary Clinton como jefa del Departamento de Estado, que dio continuidad y profundizó procesos desestabilizadores iniciados por la administración de George W. Bush. Una de las situaciones mas dramáticas la constituye Libia, hoy un estado fallido sumido en una guerra civil.

Asimismo, en Oriente se ha visto un auge de la influencia de China, que ha mantenido altas tasas de crecimiento por un largo período, transformando primero su carácter agrícola en industrial, para luego convertirse hoy en un productor de tecnología de alto nivel, ocupando una posición competitiva que ha puesto en cuestión el orden internacional en el campo de NTIC y otras áreas científico técnicas. Al mismo tiempo, se observa un alza en el desarrollo económico y científico técnico de la India, con lo que los dos más grandes mercados, atendido el tamaño de su población, se instalan en posiciones expectantes para el nuevo orden internacional, transformándose en el desafío más importante a la posición dominante que ha mantenido Estados Unidos desde el fin de la segunda Guerra Mundial y la posterior reconfiguración hacia un orden unipolar luego de la caída de la URSS y del denominado bloque socialista.

Todo ello ha multiplicado los roces entre distintos actores en la escena internacional, siendo éste el período con mayor número de conflictos abiertos y, desde el punto de vista del riesgo para la especie, según lo ha sostenido el Doomsday Clock -que mide el grado de amenaza nuclear, ambiental y tecnológica para la Humanidad-, que indica que éste sería el momento en que hemos estado más cerca de nuestra extinción y de las formas de vida que conocemos. El desarrollo de la sociedad de consumo en los países desarrollados ha determinado pautas de crecimiento que producen altos niveles de polución y la más alta demanda de recursos naturales de la historia, lo que ha generado una agenda internacional destinada a contener el cambio climático, marcada por la exigencia de adopción urgente de medidas. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que los países que concentran las emisiones y el consumo se resisten a alterar sus patrones de crecimiento y mantienen su intención de transferir parte importante de los costos a quienes, como América Latina, representan menos del 3% de las emisiones globales. Esto significa una contradicción entre el Sur y su disposición a asumir responsabilidad en el tema, y el Norte y su actitud pasiva frente al mismo, en particular por arte de Estados Unidos, que ha abandonado las instancias internacionales en las que se le demanda un compromiso concreto.

La confrontación más importante del período la constituye la que se puede denominar “nueva Guerra Fría” entre Estados Unidos, por una parte y China y sus aliados como Rusia con su área de influencia, por otra. Esta guerra fría se traduce en que, en la escena global, sin exclusión de Chile, se dispute la posición de cada cual en provisión de recursos críticos como el petróleo, el gas, el litio, las llamadas tierras raras, los derivados de la madera y todas las formas de alimento. El cambio climático no sólo pone en cuestión la seguridad alimentaria sino que presionará a América Latina por ser una zona de baja densidad poblacional y que cuenta con las mayores reservas de agua del planeta, la mayor superficie de tierras cultivables -576 millones de hectáreas- y el 70% de todas las formas de flora y fauna existentes. Es en la agricultura y en la minería del cobre y litio en la que Chile ya ocupa una posición significativa en relación con su tamaño. Asimismo, la discusión sobre la contratación de 5G y el conjunto de las tecnologías que la acompañan, como también el desarrollo de infraestructura tecnológica, ha tenido también en el país un fuerte impacto. Por ejemplo, causó la primera expresión pública de diferencias entre las autoridades públicas y los embajadores chinos en el mundo, en el contexto de la crisis por la incorporación de Tianqui a la propiedad de SQM.

La pandemia de coronavirus vino a tensionar aún más la situación: la UE ya enfrentaba el desafío de la salida del Reino Unido, se mostraba desafección de parte de sus miembros a las políticas comunitarias, y se desarrollaba una tensión con Estados Unidos. Este último ahora intenta usar su poder político y económico, como gran demandante, poseedor de la moneda internacional y administrador del sistema de transacciones (SWIFT), para imponer condiciones comerciales y bloquear el acceso a los mercados a aquellos que no forman parte directa de su sistema de control, a los que se resisten a su mantención, y a los que lo desplazan por ser más competitivos. Asimismo, hizo patente la ausencia de un sistema público internacional que permita dar respuestas con autoridad frente a desafíos que requieren comportamientos globales ordenados.

Uno de los factores que más debilita al sistema internacional es que Estados Unidos, uno de sus principales impulsores post segunda Guerra Mundial, ha provocado una agudización de la debilidad propia del carácter “privado” del sistema de toma de decisiones, esto es, que los países se obligan sólo a aquello que libremente asienten, cuando esto es ratificado por su institucionalidad nacional. Esta cuestión se radicalizó cuando decidió abandonar su compromiso financiero con algunas las instituciones creadas para dar forma a ese nuevo orden internacional de postguerra. Por otra parte, se imponen acciones de fuerza, de disuasión o amenazas para la resolución de controversias, cuando no existen o son débiles los mecanismos para su solución.

En este contexto, una respuesta general a la pandemia muestra la interdependencia entre los países. Sin embargo, las respuestas nacionales varían entre estrategias de inmunidad de rebaño y estrategias de control radical en la forma de cuarentenas extendidas y prolongadas. Las posiciones negacionistas y las de cierre temprano con distintos niveles de recursos aplicados exhiben resultados variados. Sin perjuicio de lo anterior, mientras no haya una vacuna o un tratamiento efectivo en contra del Covid-19 ninguna “normalidad” será posible, puesto que la apertura a intercambios eleva la posibilidad de contagio y los malos resultados de unos impactan sobre la estabilidad de los buenos resultados de otros.

Las situaciones más llamativas en el período observado corresponden a los conflictos que Trump ha enfrentado: a) a nivel local, lo que condiciona su comportamiento global, ya que el alza de contagios y muertes amenazan las posibilidades para su reelección, y la tensión entre recuperar crecimiento y la adopción de un control estricto de los intercambios sociales lo ha contrapuesto con los gobernadores; y b) a nivel global, su necesidad de buscar responsables externos lo ha llevado a interrumpir su financiamiento a la OMS, mientras persiste en su intento de culpar a China por el origen de la infección y por una supuesta demora en la comunicación de la situación, una vez más con presiones y conflictos con sus propias instituciones de inteligencia.

En las últimas semanas se ha expresado un conflicto en el cartel del petróleo (OPEP), el que impulsó, por iniciativa Saudí y con el apoyo de Estados Unidos, una reducción del volumen de su producción con la intención de elevar el precio. La caída observada en los precios impacta en el mercado estadounidense y obliga a Trump a esfuerzos por dar sustentabilidad económica a la industria del fracking, importante

base de apoyo político de su gobierno. Sin embargo, la caída de la demanda mundial por petróleo en el contexto de la pandemia ha hecho que, hasta el momento, sus intentos hayan sido infructuosos.

Hay otros dos aspectos críticos que contribuyen a la crisis actual: primero, la evolución de la situación económica que se caracteriza por la crisis simultánea de oferta por el quiebre de la cadena de insumos y productos intermedios y la baja disponibilidad de fuerza de trabajo por las declaraciones de cuarentena y, segundo, la caída de la demanda a causa de la combinación de la reducción dramática de las personas que cuentan con empleo –más de 22 millones de estadounidenses han perdido su empleo en las últimas cuatro semanas– y por la caída de las expectativas que, en conjunto, reducen el consumo presente. Esta situación se repite en distintas partes del mundo y también se expresa en Chile.

II. Aspectos semanales.

La situación internacional sigue determinada por la evolución de la pandemia. Se observan dos ámbitos principales.

a) Situación económica: la discusión está centrada en los intentos de las principales economías del mundo por reactivarse, acelerando la llegada de una potencial recuperación. Las situaciones más críticas se han manifestado en las cifras entregadas por Estados Unidos, Alemania e Italia. Se espera que, para la segunda mitad de este año, la situación empeore seriamente y sólo comience un repunte a partir del próximo año. La revelación de una posible "cura" a través de la ingesta de un fármaco del laboratorio Gilead Science afectó positivamente a las bolsas mundiales.

b) Situación política: se acrecienta la presión del gobierno de Estados Unidos y sus aliados occidentales (principalmente Alemania, Francia y Australia) para culpar a China por la generación de esta pandemia. Trump avanza en posicionar la idea de acusar a la OMS como una agencia "controlada por China". El gran problema que enfrentan estos gobiernos es explicar por qué ellos tienen cientos de miles de contagiados y de fallecidos más que los que se alcanzaron en China, incluso corregidas las cifras con el reexamen de cadáveres.

En el caso de Estados Unidos se suma que fue la administración de Trump la que dejó sin financiamiento a la oficina de la CDC en Wuhan, que monitoreaba el trabajo de laboratorios chinos especializados y cualquier emergencia de virus que se observara en ese territorio para dar alertas tempranas y lograr una gestión inmediata. Se suma a lo anterior el hecho de que China está hoy reactivando su economía y se ha convertido en el gran generador mundial de suministros médicos. Todo indica que la presión de las potencias occidentales crecerá y logrará cautivar la discusión pública en los próximos meses, lo que quizás sea la única forma disponible para contrarrestar el previsible aumento del prestigio chino a nivel global.

El contexto sanitario en Chile

Se ha hecho evidente la crisis de credibilidad respecto de los datos provistos por el Ejecutivo y, por lo mismo, del conjunto de las proyecciones que se basan en ellos. A la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones se contraponen las expresiones de organismos y personas de alto prestigio como, por ejemplo, las dirigencias regionales del Colegio Médico; los periodistas de investigación; Espacio Público; la Sociedad Chilena de Epidemiología (SOCHEPI); CIPER Chile; la mesa de Datos; y el Instituto Milenium de Fundamento de los Datos.

Las dificultades, como se ha sostenido en los informes anteriores, se expresan en tres ámbitos:

a) La insuficiencia y las dudas sobre la veracidad y la calidad de los datos referidos a la infección, con consecuencias sobre la posibilidad de determinar la curva de contagio, en qué momento se pudiera llegar a el o los peaks, y los órdenes de magnitud que éstos pudieran alcanzar. Es preciso anotar que se están transgrediendo normas explícitas que obligan a la publicidad de los actos públicos y de la necesidad de fundamentar dichas decisiones, como se puede observar en el “Informe sobre crisis sanitaria y marco legal de información” disponible en la página web de FC.

Son particularmente preocupantes las omisiones de conteo y los rechazos que impiden ser contados, de los que derivan muertes no registradas —teniendo como causa el Covid-19— y una medición inadecuada de los positivos asintomáticos y los recuperados genuinos (los fallecimientos requieren un tratamiento particular).

Es importante destacar el punto de inflexión en la tendencia observada los últimos días, que genera inquietud en la población y alerta sobre las recientes decisiones impulsadas por el Ejecutivo como son, por ejemplo, la apertura de centros comerciales. Los planteamientos que buscan flexibilizar la cuarentena y propenden a la apertura de espacios comerciales constituyen una contradicción ante la evidencia del aumento considerable de las cifras de contagiados.

b) La situación de mortalidad asociada a Covid-19 sigue siendo un flanco donde se han levantado importantes cuestionamientos. De una parte, se denuncian muertes por Covid-19 no reportadas en la información oficial (p.ej. en Magallanes), como también casos en que el aislamiento previo a la pandemia (zonas rurales) que puede ser visto como una ventaja ante el contagio, representa formas de interacción social de alto riesgo y en condiciones de difícil acceso a oportunidades de atención. Asimismo, aquellas personas que no se presentan a postas y quedan declaradas por alguna dolencia preexistente o por neumonía sin hacer referencia al Covid-19. También se observan casos de denegación de atención donde se combina el tratamiento como contagioso del cadáver y sepelio o cremación acelerado y aislado y sin quedar registro de la infección que explica dichas medidas de resguardo.

Todo ello, junto al hecho de que la mortalidad no se corresponde con ninguna tasa observada en la pandemia en otros lugares, despierta dudas entre los analistas.

c) Existen cuestionamientos fundados que estiman que la capacidad para atender a los contagiados con sintomatología grave es menor que la señalada por el Gobierno. Diversas fuentes apuntan a que las instalaciones “preparadas” para recibir el exceso de demanda, que se agudizará a partir de la segunda semana de mayo con la llegada de las otras infecciones virales estacionales, no se encuentran en el estado declarado por el Gobierno. La confirmación de que el equipamiento recibido como donación no cumple los estándares requeridos o se orienta a reducir el contagio más que a la oportunidad de atención es preocupante.

En el caso de los respiradores mecánicos donados por la CPC, se informa por fuentes del Ministerio de Salud que los equipos corresponden a una resolutivez menor. Si bien son invasivos, no cuentan con la capacidad de atender situaciones complejas generadas por SARS-CoV2 y Covid-19, al no contar con todas las posibilidades de ventilación —gatillaje, alta frecuencia, forma de ciclajes. Lo que permite constatar la existencia de un alto riesgo para la población que comenzará, según Espacio Público, a verificarse en 8 días. La información técnica oficial se está solicitando vía ley de transparencia para conocer los modelos y características de los VM donados.

Entre el exitismo y el riesgo de un desastre, la pandemia se expandirá según la eficacia de las medidas de contención (cuarentena parcial o general) y su capacidad resolutivez. El Gobierno ha perdido credibilidad y los cambios en la tendencia observada, de ser reales los datos, exigen respuestas decididas, claras y creíbles. La ambivalencia observada en la atención a la crisis económica por sobre las condiciones sanitarias ponen un manto de dudas sobre su gestión.

Las consecuencias económicas de la crisis y las medidas adoptadas en Chile.

I. Aspectos generales

La situación económica, en el mediano plazo, ha evidenciado un agotamiento del crecimiento basado en exportaciones de commodities, un sistema financiero hiperprotegido, limitado en su tamaño, y sometido a procesos progresivos de concentración, y un mercado al detalle altamente concentrado que en conjunto ha determinado una muy baja tasa de agregación de valor. Lo anterior ha permitido la transferencia sistemática de utilidades y recursos a un restringido grupo de empresas, controladas por familias y transnacionales, que a su vez reciben financiamiento barato del Banco Central y de los fondos previsionales, gracias a tasas que no se transmiten a los clientes finales.

Todo ello ha significado pérdidas de dinamismo y de capacidad de transformación y hacen estériles muchos de los esfuerzos del Estado por impulsar el crecimiento e incrementar la productividad. Sin embargo, los estímulos más importantes para

realizar innovación y transformar la producción se encuentran esterilizados por dos condiciones:

- a) La apropiación de la renta de recursos naturales que permite tasas de ganancia efectiva muy por encima del promedio internacional.
- b) La condición oligopólica, financiera y comercial, que permite transferir el costo de las ineficiencias a los clientes finales y, en el caso del comercio, a los proveedores intermedios.

Desde el punto de vista de los trabajadores, la capacidad de sostener los niveles de vida ha dependido fuertemente del acceso al crédito, caro y aun más cuando se efectúa a través de casas comerciales. Los ingresos por trabajo estaban lejos de solventar el consumo y habían dado origen a una excesiva dependencia, puesto que salir del sistema financiero implicaba quedar excluido del consumo, lo que a su vez volvía impensable perder el empleo. Ante la caída del crecimiento lo anterior se empezó a amagar, por lo que el horizonte de expectativas se deprimió. Con ello, la base de la hegemonía que utilizaba la subordinación como mecanismo para sostener los niveles de consumo a costa de un alto endeudamiento se empezó a resquebrajar. Es éste uno de los elementos que incide en el estado de ánimo que posibilitó lo ocurrido a partir de octubre de 2019.

La promesa política de Piñera de aumentar el crecimiento y, con ello, la mejora de las expectativas de vida, ya en marzo se veía difícil de cumplir. La caída del crecimiento no comenzó a mediados de octubre, sino que lo hizo desde abril de 2018 con algunos repuntes asociados a condiciones internacionales. La crisis abierta que plantea el 18-O interrumpió los procesos económicos y provocó caídas adicionales, las que se comenzaron a recuperar durante el primer trimestre del año hasta la emergencia del Covid-19.

La crisis económica internacional, de oferta y demanda simultáneas, genera impactos graves sobre una economía abierta como la chilena, la que se caracteriza, además, por la poca sostenibilidad del modelo de desarrollo con sus altos niveles de concentración. La crisis política pone mayor presión a la situación económica y se ve agravada la situación por el Covid-19 y su impacto en la vida social.

En la situación actual la discusión económica refiere a tres aspectos:

1. Cuántos de los efectos de la crisis deben ser pagados por el capital o el trabajo en el presente.
2. Cuántos de los efectos de la crisis deben ser pagados por el capital o el trabajo en el mediano y largo plazo.
3. Cuánto del modelo de desarrollo debe ser cambiado, en qué dirección y qué forma puede adoptar la transición.

Es en los primeros puntos donde la discusión ha sido más evidente. Una posición firme han sostenido los grandes conglomerados y las soluciones han hecho recaer el costo en los trabajadores y sus ahorros (seguro de desempleo), apostándose al uso en forma de crédito de sus fondos previsionales. Los subsidios resultan

insuficientes y no cubren el período en que serán requeridos y son más eficaces en las condiciones de trabajo formal. Los empresarios reciben apoyos en forma de créditos de capital de trabajo y algunos “salvatajes en áreas de alto impacto” y el Estado aspira a que la banca colabore con las postergaciones de las cuotas de créditos durante la crisis.¹ El Estado se ha negado a utilizar con energía sus ahorros en fondos soberanos para tiempos de crisis. Asimismo, no ha recurrido a su capacidad de endeudamiento a la que sí han concurrido otros países de América Latina. En el mediano plazo, el endeudamiento adquirido en contexto de crisis difícilmente podrá ser pagado por el mero expediente del crecimiento. Con ello, se anticipa que, de producirse altas dosis de endeudamiento, se deberá elevar la carga impositiva. Sin embargo, no podrá provenir de impuestos indirectos llevados al límite y que afectan el consumo de una población que saldrá mas empobrecida, sino que gravará la actividad de las empresas de mayor tamaño relativo y grandes fortunas.

El tercer punto puede ser asumido al menos en tres posiciones. La primera, fundamentalmente sostenida por parte de los empresarios, espera un retorno al 17-O, es decir previo a la movilización social. Esto explica la adopción de medidas laborales, por ejemplo sobre sindicalización, en el contexto de la pandemia, y también algunas expresiones desde el llamado “partido del orden”, y en la forma en que se zanja el liderazgo del mundo empresarial. La segunda, que podría denominarse capitalismo compasivo, afirma la necesidad de introducir cambios que atenúen el impacto sobre las grandes masas y su fuerza de trabajo. En su momento Enrique Cueto, director ejecutivo de LATAM, sostuvo que estaba disponible para pagar por paz social. Y la tercera posición afirma la necesidad de implementar cambios sistémicos, esto es, realizar cambios que afecten la forma que adopta la estructura productiva, que generen una nueva relación entre el capital y el trabajo, y que propendan a la adopción de un nuevo patrón de inserción en la economía mundial, con un rol importante del Estado en el uso de los recursos naturales y su renta hacia un desarrollo sostenible. A ellos se entiende como desafiantes sistémicos.

II. Aspectos semanales

Fue publicado el reglamento por el que Hacienda regula el acceso a los nuevos fondos de FOGAPE (Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios) otorgado por el proyecto aprobado el 16 de abril que lo capitaliza por US\$ 3.000 millones. Esto permitirá otorgar nuevos créditos por hasta 24.000 millones de dólares a empresas que necesitan liquidez para enfrentar los efectos económicos derivados de la expansión del Covid-19 en Chile y el mundo.

La disputa por el cobro de intereses de la postergación del pago de cuotas de créditos de consumo e hipotecarios para PE y personas naturales se zanjó en favor de la banca, estableciéndose que en las reprogramaciones exigidas para tomar la línea Covid-19, los bancos deberán reprogramar los créditos vigentes postergando la amortización de capital por 6 meses. Sin embargo, podrán cobrar los intereses en la mismas condiciones originales del crédito postergado. No se incorporan condiciones más blandas en intereses para los créditos vigentes, sino que sólo se posterga la amortización de capital. Los fondos otorgados fueron licitados en su

¹ Como se verá más adelante, esto no fue logrado ante la fuerte resistencia de la banca.

primera cuota —US\$ 1.000 Millones— favoreciendo a la banca privada (Banco de Chile y Santander) frente a la Banca Estatal (BancoEstado) en una relación de 4 a 1.

El día 27 de abril el Gobierno dió luz al proyecto que busca financiar a los trabajadores independientes que boletean. Este adopta la forma de un seguro equivalente al de cesantía y que genera una carga de 0,4% de las boletas para su financiamiento regular. El objetivo es compensar en hasta un 70% la caída de ingresos en los últimos meses para quienes trabajan a honorarios, con un tope máximo mensual de \$500.000 y lo financia en principio con US\$300 millones. Una vez más el mecanismo hace recaer la protección laboral en los ingresos del trabajador.

La discusión de un proyecto que pone fin a las AFP traspasando los fondos al Estado, como en el modelo argentino, ha desatado un vendaval de críticas, con muy poco espacio a sus impulsores —senadores de oposición— para su defensa pública. Se trata de un nudo crítico del sistema económico al constituir, no un ahorro previsional —sus resultados se alejan de lo prometido— sino que un sistema de financiamiento alternativo a bajas tasas para las instituciones económicas nacionales e internacionales, como lo muestra la Fundación Sol en su último estudio.

Dicho proyecto senatorial no coincide con el de No + AFP y no es suficientemente conocido. El tema previsional tiene la potencia de interpelar al sistema de protección social y simultáneamente al sistema económico, evidenciando la alta imbricación entre ambos. La defensa del actual sistema previsional concitará potencialmente la intervención del Tribunal Constitucional, si se deroga el decreto ley 3.500 que da existencia legal a las AFP. Es importante anotar que las AFP acumulan en sus fondos administrados alrededor de un 80% del PIB, esto es, US\$212.860 millones de dólares. De este monto han sido invertidos en el territorio nacional el 58,4% del total.

Dicha distribución ayuda a comprender el impacto de esos fondos sobre la estructura de propiedad de nuestra economía en la forma en la que se expresa en la siguiente tabla:

Receptores	Monto recibido	Participación en los fondos de pensiones
Instituciones Financieras (principalmente bancos)	US\$44.941 millones de dólares	21,1%
Sociedades Anónimas (S.A.)	US\$29.703 millones de dólares,	14,0%
Grupo Luksic (es el que recibe la mayor cantidad de inversiones desde los fondos de pensiones)	US\$8.956 millones de dólares	4,2% del total de fondos de pensiones y el 17,7% de la inversión de los fondos en grupos económicos de capitales nacionales

11 grandes grupos multinacionales de capitales extranjeros que operan en Chile	US\$14.942 millones de dólares	7,02%
Grupo Matte	US\$6.056 millones de dólares.	2,85%

Como resulta evidente, es difícil separar el sistema de protección social del modelo de financiamiento de la actividad económica, lo que a su vez ayuda a dimensionar la magnitud del lobby, dado lo que está en juego.

La situación de derechos humanos en Chile

I. Aspectos generales

La situación de derechos humanos constituye uno de los ámbitos donde la justicia transicional en Chile muestra su debilidad. La disputa se expresa de manera continua desde el inicio de la transición en toda la escena política, al permanecer abiertas situaciones del pasado. Por otra parte, como en muchas dimensiones de la vida política, constituye un espacio en disputa impactado por la sobre representación de la derecha que, con poder de veto, ha resistido medidas de reparación y sólo forzada ha debido reconocer violaciones a los DD.HH. y el impacto civilizatorio de los mismos.

La situación se hace más grave cuando se mira la perspectiva de derechos humanos en el presente. La falta de respeto de derechos de las mujeres en ámbitos sexuales y reproductivos; la insuficiencia de las medidas orientadas al respeto de la integridad física y psicológica de mujeres, niños y grupos sociales diversos, por ejemplo, por diferencias en su sexualidad; el desconocimiento de derechos de los pueblos originarios y de inmigrantes dan cuenta de una sociedad en transición potencial a una sociedad de derechos, disputa que está representada por quienes abogan por una pluralidad social y quienes se inclinan por una auto percepción de homogeneidad social. A esto se suma el desconocimiento de los derechos políticos y la aplicación de la violencia institucional y policial en contra de las disidencias. Es así como la discusión sobre derechos humanos en Chile es continua y, pese al deseo de muchos, inclusive la institucionalidad de derechos humanos, que expresa un compromiso del Estado, se ve sometida a tensiones importantes, convirtiendo lo que se ha logrado no en un piso, sino que más bien en un terreno aún en disputa.

II. Aspectos semanales

Junto con observarse situaciones complejas respecto de personas infectadas por Covid-19 y sus familias, se ha visto cómo la tensión entre la gestión de la pandemia y la restitución de la actividad económica no garantiza las libertades políticas. Una vez más Carabineros reprime a la población que protesta, sin perjuicio de respetar la restricción del número máximo de personas reunidas que fija la norma, y agrade a la prensa nacional e internacional. En el marco de la conmemoración del 1º de mayo,

de la reacción espontánea de algunas organizaciones sociales ante el aniversario de Carabineros, de la manifestación de la ANEF, y de la apertura de malls, se registraron muchos hechos de grave violencia, lo que confirma que las fuerzas policiales no han cambiado su estrategia de enfrentamiento al movimiento social.

Al mismo tiempo sigue el drama al interior del INDH. Su director adoptó en entrevistas en la prensa una posición que cuestiona principios fundamentales de la doctrina de DD.HH., lo que condujo a su cuestionamiento público por una parte del mismo Consejo y generó solicitudes de renuncia. El conflicto, iniciado por la redacción del informe anual de DD.HH. que emite la institución —y que significó la salida de profesionales experimentados—, se mantiene en los terrenos institucionales sin la intervención de los partidos políticos. El conflicto es importante pues afecta a una institución que será clave en el periodo que se avecina, tanto en el contexto de la pandemia como en la eventual reposición de las movilizaciones en el marco de la crisis económica en marcha.

La situación política en Chile

I. Aspectos generales

El 18 de octubre marcó un punto de inflexión en la deriva negativa de la situación política. El movimiento de protesta no inicia la crisis, puesto que todas las mediciones indicaban una pérdida de confianza hacia las instituciones previa a la emergencia de la protesta masiva. En esa línea, parece ser parte de una secuencia de cuestionamientos expresados en la calle hacia las características del ordenamiento social que consideraban: el sistema educativo en su segmento escolar; el sistema educativo en el nivel universitario; el sistema previsional; la subordinación del medio ambiente a los objetivos de desarrollo; la desigualdad y violencia contra las mujeres; el sistema previsional. Es así como el 18-O se presenta como la convergencia y explosión de todos los reclamos anteriores, cuestionando directamente la desigualdad y mostrando la radical desafección de la ciudadanía a las instituciones, incluidas las fuerzas policiales. En suma, es un fuerte cuestionamiento a un patrón de desarrollo caracterizado como neoliberal y que involucra dimensiones políticas, sociales, culturales y económicas, y se comporta como un sistema de explotación, corrupción, abusos, y reproducción de la desigualdad.

Como ya mencionamos, la crisis de la que da cuenta el 18-O se anuda con la crisis económica y, con menor intensidad, con la forma en que la que se traduce en el uso de los recursos naturales y del sacrificio medioambiental. Ante dicho cuestionamiento el establishment ofrece una salida potencial, obligando a los segmentos conservadores a aceptar la implementación de un proceso constituyente. La existencia de un acuerdo entre las fuerzas de derecha moderna y el partido del orden había marcado un largo período post dictadura que combinaron crecimiento económico y gasto social, sin alterar las relaciones capital-trabajo ni las políticas monetaristas y adhiriendo al orden económico neoliberal. Durante los gobiernos de

la Nueva Mayoría estos sectores fueron parte de la disidencia interna que bloqueó parte de las iniciativas de cambio que impulsaba el gobierno.

Esta vez la movilización social extensa y radical imponía una presión al cambio, sin que se expresara una forma específica para la salida. El acuerdo adoptado en una ardua negociación plantea la posibilidad de romper —si bien aun con controles supra mayoritarios— precisamente con la existencia de dichos controles a través de dos plebiscitos y una asamblea constituyente. El mecanismo elegido, sin embargo, otorgó poder de veto a quien alcanzara un tercio más uno de los constituyentes electos. Con ello se abría una escena con el potencial de poner fin a 39 años de protagonismo de la Constitución instaurada en dictadura y cuyo carácter pervivió a todos los intentos de reforma.

Durante los días posteriores al acuerdo se expresó un cuestionamiento al mecanismo y a sus participantes institucionales. Sin embargo, progresivamente se reconoció en ello un avance. Sin embargo, el alineamiento mayoritario y las movilizaciones fueron interrumpidas por la emergencia de la pandemia y su amenaza planetaria. El alto riesgo de mortalidad actuó como punto de inflexión para distintos actores, entre ellos para quienes impulsaban las movilizaciones. Esta dinámica se expresó como clivaje en la interpretación del Covid-19 no como un hito independiente, sino que como una nueva forma que muestra con mayor evidencia la desigualdad, el abuso y la corrupción, sobre todo dado que los actos del Gobierno producen que la distribución de las cargas asociadas a la pandemia sea desigual. Lo anterior se entronca con la percepción económica y las denuncias previas, apuntando especialmente al sistema de protección social, lo que puede ser concebido como una triple tensión.

al sistema de protección social, lo que puede ser concebido como una triple tensión.

Dimensión o tipo de crisis	Tipo de problema en gestión	Tipo de estrategia en la gestión de la pandemia
Política o de credibilidad de las instituciones	Orden público	Declaración de Estado de catástrofe y toque de queda (efecto simbólico)
		Extensión de la cuarentena a las plazas emblemáticas y centros cívicos regionales
		Uso del miedo para contener movilizaciones
Crisis sanitaria	Contención de contagio y generación de capacidades de atención	Cuarentenas móviles y focalizadas
		Manejo severo de la información sin posibilidades de auditoría ciudadana
		Proyección de imagen de control y éxito y matención de miedo en el ambiente
		Gestión reservada del incremento de las capacidades resolutivas y magnificación de los resultados, sin posibilidad de auditar
Crisis económica	Distribución de costos presentes a consecuencia de pandemia	Transferencia de costos a los trabajadores en tanto individuos
		Necesidad de acortar cuarentenas para retomar ritmo de crecimiento
	Distribución de costos futuros, asociado a compromisos que el país suscriba como créditos	Mínima solicitud de créditos para no comprometer alzas de impuestos posteriores
		Situación de salida en términos de la mantención del modelo de desarrollo neoliberal

Las crisis económica y política se traducen en demandas contradictorias en la gestión de la pandemia por parte del Gobierno. Mientras la crisis política lo obliga a mantener el miedo y el control, con cuarentenas que subordinan cualquier

requerimiento de intercambio normal, la crisis económica demanda la recuperación al más corto plazo de la “normalidad”. Esta dualidad es la que explica los comportamientos ambivalentes en el manejo de ambas crisis. Estas cuestiones son excedidas cuando las tasas se disparan: es evidente que una crisis sanitaria desbocada es un impedimento para el manejo de cualquiera otra crisis, al restar toda posibilidad de adhesión por éxito, haciendo imposibles los intercambios y profundizando la crisis económica sin alternativas.

II. Aspectos semanales

La semana fue marcada por el alza de las tasas de contagio y la reafirmación de las dudas sobre la calidad de la información proporcionada. La proximidad de la crisis en la capacidad resolutive, presionada por la llegada inmediata de las otras infecciones virales estacionales, marca un cambio en la situación de la que MINSAL y el Ejecutivo han debido hacerse cargo. Lo anterior, sumado a la reacción política, han doblado la mano al Gobierno respecto de la posibilidad de apertura hacia una “nueva normalidad”.

En términos políticos y económicos, la noticia de la semana ha sido la presentación del proyecto de derogación del decreto ley 3.500 que trata el sistema previsional y el uso de los recursos de los afiliados en inversiones en el sector privado. Esto es destacable más allá de que su aprobación no resulte viable en el escenario parlamentario actual.

La alta represión a pequeños grupos, la criminalización de la protesta, y la situación del INDH son preocupantes ante la inminente reaparición de manifestaciones masivas en cuanto se proyecte alguna señal de normalidad. Esto pone en entredicho la estrategia del Gobierno para la reforma de Carabineros que no manifiesta diferencias en su comportamiento represivo. Asimismo, reafirma la sensación de lejanía de la ciudadanía respecto de las fuerzas de orden, a las que incluso denominan “guardia privada del Gobierno”.

Se debilitó la presión del Gobierno y la derecha por construir un escenario para dar de baja el compromiso constituyente. Sin embargo, no hay que descartar que esto se resuelva por la vía de una agudización de la amenaza del Covid-19 en las proximidades del plebiscito.

Por otra parte, pareciera quedar cada vez más claro que la mantención del Estado de Catástrofe obedece más a razones de reforzamiento simbólico (y fáctico) del control del orden público, como fue confesado por uno de los jefes de zona, que a consideraciones sanitarias o propiamente derivadas de la pandemia. Las facultades que el Estado de Catástrofe otorga no son utilizadas, como cuando el Presidente confesó que “no le fue fácil” convencer a la banca de otorgar condiciones preferentes a las PyME, o se usan otras, como el toque de queda, que no parecen incidir mayormente en la disminución de los contagios.

Ante este contexto, la crítica situación que se vive en la comuna de Santiago y otras de la Región Metropolitana, los zigzagueos en la apertura del gran comercio, y el alejamiento de la “nueva normalidad” abren un nuevo escenario político en medio

de la pandemia. El Gobierno puede culpar a la ciudadanía de su fracaso (fiesta en Maipú, centros comerciales abiertos en el centro de Santiago y otros) y aplicar medidas más estrictas de cuarentena. Este punto debe ser asumido como necesario (cuarentenas y mayores autocuidados, “sólo el pueblo ayuda al pueblo”, “nos protegemos entre nosotros, a ellos no les importa”) pero como un “triunfo” de las organizaciones y la presión ciudadana ante un Gobierno que no le interesa más que volver a una normalidad ficticia. La realidad es más fuerte, las personas son más sabias, por lo que hay que demandar que el Gobierno deje el autoritarismo y el secretismo de los datos para así vencer la pandemia.